

704

ORD.Nº/2022

REF: Solicitud de ingreso de iniciativa de norma convencional constituyente que garantiza el derecho universal a la comunicación y a la información como derecho humano

SANTIAGO, 01 de febrero de 2022

DE: ELSA LABRAÑA PINO
CONVENCIONAL CONSTITUYENTE

A: MARIA ELISA QUINTEROS
PRESIDENTA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Los y las integrantes de la Comisión de Derechos Fundamentales

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted en su calidad de presidenta de la Convención, según lo dispuesto en los artículos 81, 82 y 83 del Reglamento general de la Convención Constitucional, para presentar la siguiente iniciativa de norma constitucional que garantiza el derecho universal a la comunicación y a la información como derecho humano

INICIATIVA DE NORMA CONSTITUCIONAL

EL DERECHO UNIVERSAL A LA COMUNICACIÓN Y A LA INFORMACIÓN COMO DERECHO HUMANO

ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN LA NORMA

El despertar de los pueblos ha venido de la mano de una valoración creciente del rol ejercido por los medios comunitarios y el periodismo crítico en los momentos de crisis institucional con posterioridad al 18 de octubre y durante la pandemia. Frente al silencio de los medios tradicionales en materias tan sensibles como la sistemática violación de DDHH, han sido estos los que han levantado la voz.

El espectro radioeléctrico es un bien de uso público, cuya administración corresponde al estado, en el marco de los convenios internacionales vigentes, en especial la Convención Internacional de las Telecomunicaciones (Ginebra, 1957) y su Reglamento.

El criterio legal imperante en el mundo es que las frecuencias de radiocomunicaciones pertenecen a toda la Humanidad. Lo único que hace el Estado es administrarlas.

El estado ejerce su soberanía gestionando las frecuencias, esto es asignándolas y velando por la correcta utilización de éstas por los adjudicatarios, cuidando por que el uso de las mismas sea libre de interferencias perjudiciales, para lo cual se deben dictar las normas legales y reglamentarias correspondientes.

En Chile, La Ley N° 18.168 General de Telecomunicaciones, que ha sido profunda y sucesivamente modificada en democracia, establece un sistema de adjudicación, renovación, caducidad y obligaciones de las concesiones respectivas bajo los principios de continuidad de servicio, eficiencia, libre competencia, e igualdad y no discriminación.

No obstante, no se regula ni garantiza suficientemente el derecho a la comunicación y el derecho a la información como un derecho humano.

A su vez, respeto de los medios de comunicación comunitarios o territoriales, no existe una política pública de promoción orientada a garantizar la “factibilidad técnica” (apoyo financiero y técnico) para el desarrollo de su función.

Es especialmente a través de la promoción de los medios comunitarios donde como sociedad podremos garantizar el derecho a la comunicación y a la información, indispensables para la construcción de una opinión pública informada y reflexiva. Los medios de comunicación comunitarios juegan un rol estratégico en el fortalecimiento de las democracias. Al no estar ligados a ningún poder político o económico, aportan en la pluralidad informativa que se requiere para construir una opinión pública educada. Las

comunidades necesitan medios de comunicación para buscar soluciones conjuntas, para relatar sus vivencias, contar sus historias, para recuperar y preservar la memoria y relevar sus logros ambientales, deportivos y culturales, en definitiva, para rearticular el tejido social.

Los medios comunitarios realizan una labor social contribuyendo a dinamizar y empoderar a las comunidades diversas (feministas, socio-ambientales, plurinacionales, regionales, comunales, barriales), pero por fuera de cualquier forma de proselitismo partidista o de intereses económicos de grandes conglomerados. Muchos son los trabajadores de las comunicaciones que han aportado en el desarrollo de las comunicaciones locales y nacionales. En ello se destaca la labor realizada por Luis Polo Lillo, quien dedicó su vida al fortalecimiento de los lazos comunitarios a través de los medios de comunicación popular.

Es fundamental formar un espacio comunitario de las comunicaciones que de empleo digno y estable a los trabajadores de las comunicaciones, active la economía local, apoye la extensión de las universidades públicas y difusión de la comunidad científica. En este sentido, se requiere fomentar la cultura y las artes, dando difusión a los contenidos allí generados. En la medida que el aporte basal a los medios se encuentra condicionado a “objetivos de desarrollo nacional” como los ya mencionados.

Respecto de los Servicios de Radiodifusión:

Los servicios de radiodifusión de recepción libre y gratuita, son muy importantes para la mantención de la unidad política, geográfica, económica, social y cultural del país, fundamentales en casos de catástrofes y emergencias nacionales, determinantes para la regionalización del territorio de Chile y esenciales para la democracia en tanto posibilitan el libre flujo de informaciones, opiniones y contenidos en general.

La explotación de los servicios de radiodifusión sonora, se realiza por medio de terceros, a través de concesiones, autorizaciones, permisos y licencias que otorga el Estado, esta acción debe ceñirse a procedimientos objetivos, no discriminatorios, e igualitarios, que están establecidos en la legislación pertinente.

El organismo encargado, esto es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Las concesiones de estaciones de radiodifusión sonora se otorgan previo concurso público, según requisitos que establece la ley. Por ejemplo, se eliminaron las licitaciones públicas de concesiones, a objeto de evitar la preeminencia del factor económico y se reemplazó la adjudicación al mejor oferente, por un sorteo entre los concursantes que reúnan los requisitos técnicos, de manera que por ejemplo un pequeño radiodifusor de regiones tenga la misma opción que una cadena nacional de acceder a una concesión.

Asimismo, la caducidad, término y derechos para optar a una nueva concesión una vez expirado el plazo inicial, están también regulados por ley.

Los contenidos emitidos por las radiodifusoras están regulados básicamente por la Ley N° 19.733 “Sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo” y en el artículo 19 N° 12 de la Constitución, que establece la libertad para poder emitir opinión e informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio para todo tipo de personas, sin perjuicio de la responsabilidad por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, los cuales serán castigados en conformidad a la ley.

ARTICULADO

Art x: El Estado plurinacional garantizará el derecho a comunicar, buscar y recibir informaciones, ideas y opiniones a través de cualquier soporte, medio o fuente.

Art X: Todas las personas tienen derecho a la comunicación en su idioma de origen y el acceso a información plural, así como el derecho al uso de las tecnologías de información y comunicación.

Art x: El espectro electromagnético es un bien estratégico de uso público.

La ley determinará la normativa técnica para su explotación, uso, y adjudicación la que siempre deberá ser mediante un régimen concursal, bajo principios de igualdad, transparencia, no discriminación, desconcentración, fortalecimiento territorial, libre competencia, continuidad de servicio y eficiencia.

Art x: La constitución garantiza a todos los chilenos y chilenas el derecho a postular a medios territoriales o ciudadanos, o a medios particulares de comunicación, conforme a la ley

Los Medios Territoriales y Ciudadanos estarán conformado por organizaciones nacionales de la sociedad civil, sin fines de lucro y orientadas a ejercer el derecho a la comunicación desde las comunidades, tales como sindicatos, juntas de vecinos, organizaciones funcionales territoriales, cooperativas y prestadores locales de comunicación.

Los Medios Particulares estarán en manos de actores privados nacionales o extranjeros con o sin fines de lucro, sociedades periodísticas, empresas de comunicaciones, telecomunicaciones, tecnológicas y demás relacionadas.

Los Medios Estatales_estarán en manos del Estado, para la construcción de medios públicos de alto estándar democrático.

El estado no podrá mantener más de un medio público de alcance nacional.

El estado, incluyendo las Municipalidades y sus corporaciones, solo podrá mantener medios locales en aquellos sectores donde no existan medios territoriales alternativos.

Art x: El Estado garantizará la no concentración de los medios de comunicación en el uso del espectro electromagnético, fomentando la participación plural de diversos actores en el escenario medial, por tanto ninguno actor podrá concentrar más del dos por ciento de total de las bandas electromagnéticas y radioeléctricas disponibles.

Art x: El Estado, garantizará a los medios Territoriales y Comunitarios la factibilidad y el acceso técnico a través de la inversión y financiamiento estatal directo y permanente y el fortalecimiento de mecanismos y fondos concursales de fomento a la actividad, con activa participación de los gobiernos regionales y locales y demás instituciones públicas vinculadas.

Art x: El avisaje estatal será distribuido entre los medios particulares, los comunitarios y los estatales, mediante criterio de redistribución y equidad, con especial aporte a los medios territoriales respecto de los cuales se optará preferentemente por mecanismos de asignación o trato directo.

Art x: El Estado regulará que los medios comunitarios o particulares que reciban financiamiento o avisaje estatal, sostengan políticas de difusión de las artes, las ciencias y las culturas, en alianza con las universidades públicas, la comunidad artística, cultural y científica nacional, mediante líneas permanentes de formación y capacitaciones en el ámbito de las comunicaciones locales, alternativas, ambientales y feministas con especial atención en comunidades y grupos históricamente excluidos.

Art x: Es incompatible la vinculación comercial o jurídica de cualquier tipo, entre los controladores de medios de comunicaciones y los controladores de bancos e instituciones financieras, consorcios y grandes conglomerados económicos nacionales o internacionales, agrupaciones político partidistas, y empresas o sectores económicos estratégicos.

Art x: La ley garantizará que los medios de comunicación se encuentren controlados por un órgano o Concejo autónomo e independiente del poder central, con presupuesto propio, paritario, intercultural y temporal, integrado por representantes de las universidades estatales, el colegio de periodistas, las asociaciones de radiodifusores, el sindicato nacional de los trabajadores de la comunicación, la comunidad artística, cultural y científica nacional, y las comunidades territoriales. Ningún poder del estado podrá tener participación ni injerencia en el Concejo.

Dicho Consejo podrá también ser titular activo para requerir de la autoridad competente, de acuerdo a la ley, la aplicación de sanciones o la caducidad de las concesiones otorgadas.

Art x: Estará prohibida la difusión en medios de comunicación de discursos que generen instigación, apología o propaganda en favor de la guerra, del genocidio, del ecocidio, de la incitación al odio, a la violencia por motivos de discriminación nacional, racial, étnica, de sexo, identidad y/o expresión de género, religiosa, política, económica, o de cualquier otra naturaleza, contra cualquier persona o grupo de personas. Se prohíbe la difusión en medios de comunicación de discursos a favor del negacionismo y del negacionismo climático.

Art x: Ninguna persona podrá ser sancionada con penas privativas de libertad por el solo hecho de operar o explotar servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión,

Art x: Se creará una distribuidora estatal que garantice la circulación de publicaciones periódicas impresas y el acceso a papel para dichas publicaciones.

Artículo Transitorio. La Ley deberá adecuar todas las disposiciones de la Ley General de Telecomunicaciones, N° 18.168, que estuvieran en contradicción con las disposiciones de la Nueva Constitución.

NORMATIVA COMPARADA

La Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece en el Artículo 13 que “el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión”, que la administración del espectro radioeléctrico sea estrictamente técnica y no de lugar a interferir en la libertad y autonomía editorial de los medios de comunicación que por su naturaleza hacen uso del espectro radioeléctrico.


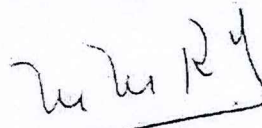
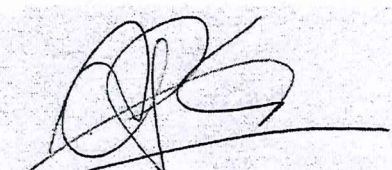

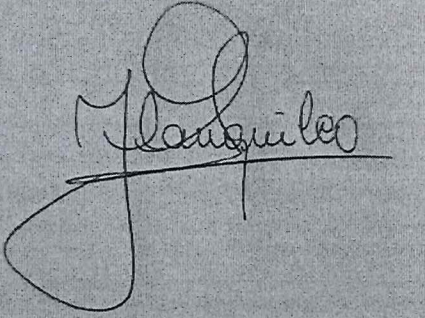

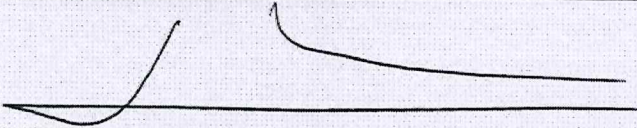
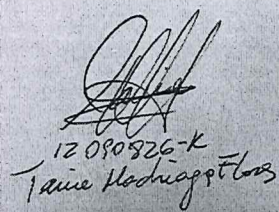
De esa forma se salvaguarda también el cumplimiento del artículo 13 de la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH:


13. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

En otro orden, tal como señala el artículo 12 de la citada declaración:

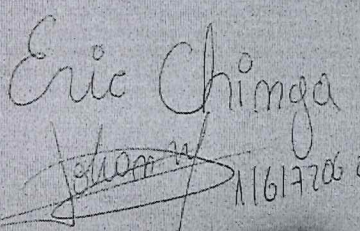
Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

Patrocinios:

 Elsa Labraña 12018818-6 <p>Elsa Labraña Pino Distrito 17</p>	 María Inapoloquio Rivera 8515540-7 <p>María Rivera Iribarren Distrito 8</p>
 Alejandra Perez Espina 13-251.766-5 <p>Alejandra Perez Espina Distrito 9</p>	 MANUEL WOLDARSKY GONZÁLEZ DISTRITO 10 <p>Manuel Woldarsky González Distrito 10</p>
 15.880.046-2 Natividad Llanquileo – Escaño Mapuche <p>Natividad Llanquileo – Escaño Mapuche</p>	 Lisette Lorena Vergara Riquelme 18.213.926-2 Lisette Vergara Riquelme Distrito 6 <p>Lisette Vergara Riquelme Distrito 6</p>
 Roberto Celedon Distrito 17 <p>Roberto Celedon Distrito 17</p>	 12080826-K Tania Madriaga Flores <p>Tania Madriaga Distrito 7</p>


Marco Arellano Ortega
14. 240.925-4

Marco Arellano
Distrito 8


Eric Chinga
116172062

Eric Chinga
Diaguita



Francisco Caamaño
Distrito 14